AMPARO EN REVISIÓN 26/2025

QUEJOSA Y RECURRENTE ADHESIVA: GRUPO SLA MINING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

RECURRENTES: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRAS

PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA

SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO

COLABORARON: CLAUDIA IVETTE ARROYO MORALES

STEPHANIE ARRIAGA CASILLAS

SÍNTESIS

Hechos: Una persona moral promovió amparo indirecto en contra de la Cámara de Diputados y Senadores ambos del Congreso de la Unión, el Presidente de la República y otras autoridades, por la expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Minería, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral para los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en su totalidad, pero de forma particular por los artículos 19, 20, 23, 27, 41, 46 y 64 de la Ley de Minería.

En sentencia la juez de distrito resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados y autoridades responsables y los actos de aplicación del Decreto tildado de inconstitucional en materia de concesiones para minería y agua; por otro lado, concedió el amparo a la quejosa para que no fuera aplicado el decreto impugnado.

En contra de esta determinación el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados, la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, interpusieron recurso de revisión del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito

El tribunal colegiado asignado en sesión de trece de noviembre dos mil veinticuatro, determinó: a) desechar el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Economía, b) confirmar la sentencia en lo que corresponde a su competencia en cuanto al análisis de las causales de improcedencia y; c) ordenó enviar los autos del asunto a esta SCJN para que se asumiera la competencia originaria respecto a la constitucionalidad del Decreto impugnado.

ÍNDICE TEMÁTICO

	Apartado	Criterio y decisión	Pág s.
I.	COMPETENCIA	Este Pleno es competente para conocer del presente asunto.	9-10
II.	OPORTUNIDAD	El tribunal colegiado se ocupó del análisis de este apartado.	10
III.	LEGITIMACIÓN	El tribunal colegiado se ocupó del análisis de este apartado.	10
IV.	ESTUDIO DE FONDO	<p>Es fundado y suficiente el agravio de la recurrente dado que la parte quejosa no está legitimada para impugnar la violación al procedimiento por no motivarse la urgencia de la discusión de la iniciativa, dado que la afectación solo puede alegarse por los legisladores.</p> <p>Resultan infundados los agravios hechos valer por el recurrente adhesivo.</p> <p>Se actualiza de oficio la causa de improcedencia del artículo 61, fracción XII, se sobresee respecto de los artículos 20, párrafo primero, 23, 41, 46 y 64 del Decreto reclamado.</p> <p>Se concluye que los conceptos de violación que la jueza de distrito no examinó son infundados, por tanto, se niega el amparo respecto los artículos 19, 20 (con excepción del párrafo primero) y 21 reclamados del Decreto</p>	10-21
V.	DECISIÓN	<p>PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.</p> <p>SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto de los artículos 20 párrafo primero, 23, 41, 46 y 64 de Decreto reclamado.</p> <p>TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa contra de los artículos 19, 20 (con excepción del párrafo primero) y 21 reclamados del Decreto.</p> <p>CUARTO. Es infundada la revisión adhesiva</p>	22

AMPARO EN REVISIÓN 26/2025

QUEJOSA Y RECURRENTE ADHESIVA: GRUPO SLA MINING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

RECURRENTES: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRAS

VISTO BUENO
SRA. MINISTRA

PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA

COTEJÓ

SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO

**COLABORARON: CLAUDIA IVETTE ARROYO MORALES
STEPHANIE ARRIAGA CASILLAS**

Ciudad de México. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al ****, ***** emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el **amparo en revisión 26/2025**, interpuesto en contra de la sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil veintitrés, en el expediente principal 1405/2023, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, dictada en auxilio por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito del estado de Chihuahua (expediente auxiliar 54/2023).

El problema jurídico que este Tribunal Pleno debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Minería, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral para los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ocho de mayo de dos mil veintitrés, específicamente, los artículos 19, 20, 23, 27, 41,46 y 64 de la Ley Minera.

ANTECEDENTES

1. **Demanda de amparo (1405/2023).** Grupo Sla Mining Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. de R.L de C.V.), a través de su representante legal Leonel Quezada Olivas, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, el Presidente de la República y otras autoridades, por la expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Minería, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral para los Residuos, en materia de

concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés.

2. La quejosa señaló en sus conceptos de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1o., 14, 16, 63, 71, 72 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

3. Por cuestión de turno correspondió conocer al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien, por acuerdo de veinte de junio de dos veintitrés, lo admitió a trámite y registró con el número de expediente **1405/2023**.

4. La parte quejosa hizo valer, en síntesis, los **conceptos de violación** siguientes:

INCONSTITUCIONALIDAD FORMAL POR IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA NORMA

- En sus conceptos de violación del **primero al décimo sexto**, precisó que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos y garantías constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, fundamentación, motivación, congruencia y estricto derecho, previstos en múltiples tratados internacionales en los que México es parte; así como en los artículos 1o., 14, 16, 41, 63, 71 y 92 de la CPEUM, toda vez que, en el proceso legislativo que culminó en la entrada en vigor del Decreto reclamado, se cometieron múltiples irregularidades con poder invalidante, lo cual repercute directamente en su esfera de derechos.
- Adujo que, se efectuó una violación al artículo 72 de la CPEUM, pues en todo proceso legislativo se deben observar las reglas previstas en la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos.

Lo anterior debido a:

- Que se transgredió el principio de deliberación democrática, dado que, la Cámara de Diputados omitió publicar con la anticipación debida la iniciativa sometida a discusión.
- La falta de publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la última versión de la iniciativa por lo que, a su consideración, los diputados desconocían el contenido real y final de la iniciativa, de acuerdo con los artículos 60, 97 y 241.2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
- La falta de fundamentación y motivación para someter a votación económica y aprobar que la iniciativa se considerara de urgente resolución, de acuerdo con el artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
- La votación realizada en la Cámara de Diputados en la que se determinó el estudio de la iniciativa como de urgente resolución debió haberse hecho por votación nominal y no económica de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
- Se omitió clarificar o establecer con qué tipo de mayoría se había aprobado la iniciativa.

- El resultado de la votación obtenida solo se hizo constar por un secretario de la Mesa Directiva y no por dos.
- La propuesta de que la iniciativa era de urgente resolución, de cualquier forma, no era viable abordar el estudio en esa misma sesión.
- La sesión que votó la iniciativa que dio origen al decreto impugnado, no debió llevarse a cabo toda vez que, no se tenía el quórum requerido en la hora señalada y fue hasta cuatro horas después de la hora establecida que se inició.
- Se omitió explicar los motivos por los cuales se realizaba el cambio de sede para llevar a cabo la sesión.
- La sesión en el senado se prolongó por diez horas, mientras que el artículo 50.3 del Reglamento del Senado establece que las sesiones no pueden extenderse más de cuatro horas.
- En el momento de la votación nominal en la sesión del senado no se contaba con el quórum requerido para reanudar la sesión mucho menos para votar.
- En el concepto de violación **décimo séptimo**, señaló la existencia de múltiples irregularidades adicionales en el proceso legislativo seguido ante del Poder Ejecutivo, que culminó en el Decreto reclamado, pues indica que solamente fue refrendado por el Secretario de Gobernación, sin que lo hiciera la Secretaría de Economía de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la CPEUM.

INCONSTITUCIONALIDAD MATERIAL POR EL CONTENIDO DE LA NORMA

- En el concepto de violación **décimo octavo** precisó que, en el Decreto reclamado, se omitió incluir un artículo transitorio en el que se aclarara la situación jurídica en la que quedarán aquellas personas que, antes de la entrada en vigor de éste, adquirieron la titularidad o los derechos que otorga una concesión minera, mediante contrato privado celebrado entre particulares, en los términos de lo que establecía el artículo 23 de la Ley Minera.
- Aduce que con las modificaciones realizadas al primer renglón del artículo 19 y la reforma integral de todo el artículo 23, ambos de la Ley de Minería, se están desconociendo todos los contratos privados celebrados entre particulares, no obstante, de que estén inscritos ante la Secretaría de Economía.
- Indica que en el artículo 41 de la Ley de Minería, se establece que son nulas las transmisiones de la titularidad de concesiones mineras cuando se llevan a cabo en contravención a las disposiciones aplicables, con lo que se pretende desconocer todos los contratos privados celebrados antes de la entrada en vigor de dicho Decreto.
- En los conceptos de violación **décimo noveno**, **vigésimo** y **vigésimo tercero** expresa que, el Decreto reclamado, tiene una aplicación retroactiva porque priva de derechos adquiridos, pues desconoce como titular de las concesiones a quienes adquirieron alguna mediante contratos privados, con lo que se viola el derecho adquirido a obtener la expropiación de los terreros para llevar a cabo las

obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio; aprovechamiento de aguas provenientes del laboreo de las minas, sin tener que pagar contraprestación alguna por su aprovechamiento; obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente; transmitir la titularidad; y, obtener prórroga en concesiones mineras, por un nuevo plazo de cincuenta años; lo que considera viola lo establecido en los artículos 1o., 14 y 16 de la CPEUM.

- Agrega que, con las modificaciones al artículo 19, fracción I, de la Ley Minera, también se vulneran los derechos y garantías constitucionales de libertad de trabajo, contenida en el artículo 5 de la CPEUM, al impedir a la quejosa realizar trabajos de exploración que venía desarrollando de manera lícita.
- Precisa que, antes de la reforma, en el artículo 46, fracción VI, de la Ley Minera, se establecían los actos que se debían inscribir en el Registro Público de Minería, entre los que encontraban, los contratos privados mediante los cuales se haya transmitido la titularidad de una concesión minera; pero que, en el Decreto reclamado se eliminó la posibilidad de inscribir dichos contratos y la respectiva sección en el Registro.
- Expone que, en el decreto que modificó los artículos 27, fracción XVI y 64 de la Ley Minera, como nueva obligación se establece dar aviso en forma inmediata a la Secretaría cuando durante el desarrollo de las actividades mineras se advierta la presencia de otros minerales no autorizados expresamente en el título de concesión, así como entregar dichos materiales a esa dependencia, bajo la pena de incurrir en el delito previsto en el segundo de los artículos citados, que conlleva la pena privativa de la libertad hasta diez años de prisión, con lo que se restringe actividades que anteriormente estaban expresamente permitidas y formaban parte de los derechos adquiridos por la titularidad de las concesiones.
- En el concepto de violación **vigésimo primero**, aduce que, con motivo de las reformas al artículo 27, fracción XV, de la Ley de Minería, se establece que el solicitante, previo al otorgamiento de una nueva concesión, debe otorgar un vehículo financiero para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, dejando fuera a quienes ya se les hubiera otorgado el título de concesión; aunado a que se tiene que cumplir con ello dentro de los trescientos sesenta y cinco días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, señalando que esa nueva obligación debe ser cumplida para evitar la cancelación la concesión, según lo previsto en el artículo 55, fracción XXI, de la Ley de Minería.
- En el concepto de violación **vigésimo segundo**, reitera que se omitió incluir un artículo transitorio donde se aclare la situación jurídica en la que quedarán todas aquellas personas que, como la quejosa, ya cuentan con la titularidad o derechos otorgados por una concesión minera ubicadas en áreas naturales protegidas y/o en las que existieran cauces o vasos de aguas nacionales, lo que, a su juicio, genera incertidumbre ante la falta de certeza respecto si se seguirá permitiendo ejecutar obras y trabajos de explotación y/o beneficio minero en los lotes de terrenos amparados en las concesiones.
- Finalmente, en el concepto de violación **vigésimo cuarto**, argumenta que, en el Decreto reclamado, se invadió la competencia exclusiva del Ejecutivo Federal prevista en el artículo 27, párrafo quinto, de la CPEUM, al adicionarse un tercer

párrafo al artículo 20 de la Ley de Minería, donde se estableció como zona vedada para ejercer la minería los causes o vasos de aguas nacionales.

5. **Sentencia de amparo indirecto.** El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua (expediente auxiliar, 54/2023), en apoyo del Juez Décimo Segundo de Distrito del estado de Chihuahua, (expediente principal 1405/2023), el diez de noviembre de dos mil veintitrés dictó sentencia, la cual determinó por una parte, **sobreseer** en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables y los actos de aplicación del Decreto tildado de inconstitucional, por otro lado, **concedió el amparo** a la quejosa Grupo Sla Mining S.R.L. de C.V.

6. Para los efectos siguientes:

- Que no fuera aplicado el Decreto publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Minería, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua.
- Se continúe aplicando la anterior Ley de Minería publicada en el DOF el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y dos.

7. Lo anterior, por las consideraciones siguientes:

- Declaró **infundadas** las causas de improcedencia hechas valer por las Cámaras de Diputados y Senadores, así como la del Presidente de la República, prevista en el artículo 107, fracción I, de la CPEUM, en relación con los artículos 5, 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, porque consideró que la parte quejosa se ubica en los supuestos de la norma reclamada, ya que con los títulos de concesión minera sobre los lotes denominados “Chipayvo”, “Arco Iris” y “La Reyna”, demostró la afectación a sus derechos que le ocasionan las normas impugnadas.
- Declaró **infundada** la causa de improcedencia hecha valer por el Presidente de la República, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues señaló que la parte quejosa combate los artículos 19, 20, 23, 27, 41, 46 y 64 de la Ley Minera, con independencia de que en sus conceptos de violación alegue violaciones en el proceso legislativo del Decreto impugnado.
- Declaró **infundada** la causa de improcedencia hecha valer por el Presidente de la República, prevista en el artículo 61 fracción XVI, de la Ley de Amparo, ya que estimó que la promulgación de las normas reclamadas no constituye un acto consumado de modo irreparable desde su publicación.
- Respecto a la causa de improcedencia hecha valer por el Presidente de la República, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, en la que se adujo que sería imposible establecer los efectos en caso de que concediera el amparo solicitado, ya que no podría darse efectos restitutivos al no existir violación alguna a derechos jurídicamente tutelados; al respecto, se declaró **infundada**, puesto que se consideró que sí es posible concretar los efectos de una hipotética concesión del amparo a la parte quejosa.

- Declaró **fundado** que la Cámara de Diputados incurrió en una violación al principio de deliberación democrática previsto en el artículo 72 de la CPEUM, por someter a votación la dispensa del trámite legislativo ordinario por urgencia cuando omitió motivarla; así como que se transgredió el principio de deliberación democrática, toda vez que, se omitió publicar con anticipación la iniciativa sometida a discusión.

8. **Recurso de revisión.** El Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados y la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores, interpusieron recurso de revisión del cual correspondió conocer al **Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito**, registrado el número de expediente **2899/2023**, mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, y admitido por diverso de uno de febrero de dos mil veinticuatro.

9. **Recurso de revisión adhesiva.** Pablo Méndez Alvidrez, autorizado de la quejosa Grupo Sla Mining S.R.L. de C.V., interpuso recurso de revisión adhesiva, admitido mediante proveído de trece de febrero de dos mil veinticuatro.

10. La Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales, en ausencia del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, quien actuó en representación del Presidente de la República y la Secretaría de Economía, interpuso recurso de revisión, admitido mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro.

11. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, **se ordenó el envío el asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, registrado con el número **RA 18/2024** (auxiliar), mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.

12. **La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores**, ambos del **Congreso de la Unión**, en sus agravios manifestaron sustancialmente lo siguiente:

- El juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, está última vinculada con el diverso 107, fracción I, de la CPEUM, ya que el procedimiento legislativo declarado inconstitucional no le genera perjuicios a la quejosa porque no tiene el carácter de parte agraviada.
- La parte quejosa no exhibió probanzas que justifiquen su interés legítimo para controvertir el proceso legislativo que culminó con la expedición del Decreto reclamado.
- La parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo quinto transitorio del Decreto impugnado.
- El Juez de distrito indebidamente justifica el interés jurídico de la promovente bajo el argumento de que está interesada en representar sus propios intereses patrimoniales al ser poseedora de diversos títulos y concesiones mineras, sin que con ello se identifique una situación diferenciada que faculte para acudir al juicio de amparo.
- La parte quejosa no acredita actos de aplicación del Decreto impugnado.

13. **La Presidencia de la República** en sus agravios manifiesta sustancialmente lo siguiente:

- El juez inobservó la jurisprudencia debido a que erróneamente determinó que la parte quejosa cuenta con interés jurídico para reclamar el proceso legislativo de las normas a pesar de que constituye un tema que sólo interesa a los legisladores.
- La parte quejosa carece de interés jurídico y/o legítimo para hacer valer conceptos de violación contra el procedimiento de creación de normas en la etapa de discusión y aprobación cuando los asuntos son urgentes y de obvia resolución, ya que, la vía para impugnar los vicios del proceso legislativo es mediante la acción de inconstitucionalidad, no así por vía de amparo.
- Aduce que, el juez no debió desestimar la causa de improcedencia que hizo valer en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la quejosa no especifica en la demanda qué artículos de la Ley de Minería reclama, y hace referencia a disposiciones que ya no están vigentes, por lo que, lo procedente era sobreseer en el juicio.
- Sostiene que, el juicio de amparo resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que para acudir a la instancia constitucional es necesario un perjuicio económico, situación que no fue valorada por el juez, pues el juicio de amparo sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, esto es, por quien experimente una lesión en su interés jurídico y no sólo una afectación económica.
- Reitera que se actualiza la causa de improcedencia porque la quejosa carece de interés jurídico para reclamar vía de amparo los vicios formales en el proceso legislativo del Decreto impugnado.
- Indica que los artículos reclamados no generan afectación inmediata o autoaplicativa a la parte quejosa.
- Señala que la quejosa controvierte supuestas omisiones legislativas como es el no referir las razones para que se actualice el supuesto de urgencia previsto en el artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y el que no se cumplieron las condiciones que ha establecido esta SCJN, que para dichos casos deben reunir las iniciativas de ley.

14. **Revisión adhesiva.** Grupo Sla Mining, S.R.L. de C.V., a través de su representante legal, interpuso recurso de revisión adhesiva, admitido mediante proveído de trece de febrero de dos mil veinticuatro.

15. La parte quejosa en **la revisión adhesiva**, hizo valer esencialmente los siguientes argumentos:

- Que en la resolución recurrida se concedió el amparo solicitado con el estudio de los dos primeros conceptos de violación, omitiéndose el análisis del resto de ellos por considerarse innecesario, siendo evidente que el juez de distrito no quiso evidenciar y/o exhibir las irregularidades cometidas en el proceso legislativo, pues algunas podrían tipificar el delito por la simulación de actos jurídicos.

- Añade que se dejaron de estudiar los conceptos de violación décimo y décimo quinto, donde se menciona que la Cámara de Senadores cometió la irregularidad de abrir la sesión sin la existencia del quórum correspondiente, y peor aún, se simularon actos jurídicos para aparentar la conformación del quórum, pues se agregó en la lista de asistencia el nombre de un ciudadano común que no es senador, específicamente del Señor Gonzalo Yáñez.
- Que en cada concepto de violación se explicó con toda claridad el derecho vulnerado con la irregularidad cometida, y específicamente con lo que respecta a los dos conceptos de violación en los que se evidenciaron las irregularidades más graves, es decir, en los conceptos de violación DECIMO y DÉCIMO QUINTO se precisó que, con dichas irregularidades se violaban en su perjuicio los derechos humanos y garantías constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, fundamentación, motivación, congruencia y estricto derecho previstos en múltiples tratados internacionales en los que México es parte, así como en los artículos 1o., 14, 16, 41, 63, 71 y 72 de la CPEUM, al abrir una sesión de la Cámara de Senadores y aprobar una norma general, sin el quórum correspondiente, pues dichos numerales establecen que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, así como que en todo proceso legislativo, se deberán observar las reglas establecidas en la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, los cuales a su vez, establecen los requisitos que se deben cumplir para la validez del proceso legislativo, entre los que se encuentra el requisito mínimo del quórum, sin el cual, no se podrá emitir una norma general.
- Indica que cuando el órgano legislativo comete violaciones a los derechos fundamentales en el procedimiento para la emisión de una ley, como lo es la seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, el juicio de amparo indirecto constituye el medio de protección apto al alcance de los ciudadanos para reparar las violaciones referidas; pues con el juicio de amparo no se tutela el derecho de los legisladores a participar en el proceso de creación o modificación de leyes, sino el derecho de los ciudadanos de ser regidos por normas generales constitucionalmente válidas.

16. **Resolución del Tribunal Colegiado de Circuito.** El tribunal colegiado de conocimiento en sesión de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, resolvió, en síntesis, lo siguiente:

- I) **Desechó** el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Economía, al carecer de legitimación, dado que la sentencia reclamada no le genera perjuicio.
- II) **Confirmó** la sentencia en cuanto a lo que corresponde a su competencia, es decir, respecto al análisis de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables.
- III) **Ordenó se enviarán los autos** a esta SCJN para que asuma su competencia originaria respecto de la constitucionalidad del Decreto impugnado.

17. **Trámite ante esta SCJN.** La entonces Ministra Presidenta, mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veinticinco, ordenó asumir competencia originaria para conocer de los recursos de revisión del Presidente de la República y la Cámara de

Senadores del Congreso de la Unión, al que correspondió el expediente 26/2025, y que posteriormente, admitió a trámite; asimismo, instruyó su turno a la Ministra Lenia Batres Guadarrama y ordenó su radicación en la entonces Segunda Sala.

18. **Avocamiento.** El Ministro Presidente de la entonces Segunda Sala, mediante acuerdo (se ajustará en engrose), se avocó al conocimiento del asunto e instruyó la remisión de los autos a la Ministra ponente una vez que se encontrara debidamente integrado.

19. **Nueva integración de la SCJN.** El uno de septiembre de dos mil veinticinco las nuevas Ministras y Ministros integrantes de la actual SCJN rindieron protesta ante el Senado de la República.

20. **Continuación del conocimiento del asunto.** El Pleno de la SCJN el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, emitió el Acuerdo General 1/2025, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F), estableciendo en el sexto transitorio que los asuntos conocidos por las Ministras de la integración previa continuarían conociendo de los mismos sin necesidad de acuerdo de retorno.¹

21. **Publicación del proyecto de resolución.** Con fundamento en los artículos 73, párrafo segundo de la Ley de Amparo² y 17 del Reglamento de Sesiones de la SCJN y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución³ se hizo público el proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

22. Este Pleno de la SCJN es competente para conocer y resolver el presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la CPEUM;⁴ 83, párrafo primero de la Ley de Amparo;⁵ 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).⁶

¹ **SEXTO.** Por decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a fin de aprovechar el conocimiento y estudio de los asuntos turnados a las Ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, en la anterior integración, se determina que continúen con el conocimiento de dichos asuntos, sin que sea necesario un nuevo acuerdo de retorno. Asimismo, a las personas Ministras María Estela Ríos González y Giovanni Azael Figueroa Mejía, les corresponderán los asuntos turnados a las ponencias de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, respectivamente, previo acuerdo de retorno.

² **Artículo 73.** (...)

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con tres días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán.

³ **Artículo 17.** Publicación de la lista de asuntos. La lista de asuntos que se verán en sesión se publicará en la herramienta informática correspondiente, así como en los estrados del edificio sede la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando menos con tres días de anticipación a su celebración, sin contar el día de la publicación ni el día de la sesión.

⁴ **Artículo 107.-** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I al VII ...

VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b)...

IX al XVIII ...

⁵ **Artículo 83.** Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine.

⁶ **Artículo 16.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá:

II. OPORTUNIDAD

23. Resulta innecesario el pronunciamiento de este Pleno de la SCJN en cuanto a la oportunidad del recurso de revisión, toda vez que, esto fue analizado por el tribunal colegiado, determinando oportuna la presentación de los recursos de revisión principales y adhesivo.

III. LEGITIMACIÓN

24. También es innecesario el pronunciamiento de este Pleno de la SCJN respecto a la legitimación de los recurrentes, pues ese presupuesto procesal fue materia de estudio por el tribunal colegiado de conocimiento.

IV. ESTUDIO DE FONDO

a) Análisis de los agravios hechos valer en los recursos de revisión

25. En este apartado se analizarán los agravios formulados por las partes recurrentes, mediante los cuales se controvierte la resolución del juez de distrito que concede el amparo a la parte quejosa.

26. En ese sentido, el juez de distrito en la sentencia consideró que se actualizó una violación grave al procedimiento legislativo, pues para que la tramitación de la solicitud de dispensa de la iniciativa de reforma adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley de Minería, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral para los Residuos en materia de concesiones para minería y agua, fuera considerada de urgente resolución debía motivarse del por qué esa circunstancia, lo que adujo, no sucedió.

27. Por ello, concedió el amparo para que no se aplicara a la parte quejosa el Decreto publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Minería, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para Minería y Agua y se le continuaran aplicando las disposiciones de minería publicadas en el DOF, el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y dos, sin las reformas contenidas en el aludido Decreto.

28. Las recurrentes aducen, entre otras cosas, que los particulares no se encuentran afectados en sus derechos por iniciativas de urgente u obvia resolución, ya que quienes pueden reclamar violaciones al proceso legislativo bajo dichas circunstancias son, en todo caso, los parlamentarios, a través de la acción de inconstitucionalidad, pues son quienes intervienen en el proceso legislativo. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J.133/2017, de rubro: **PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO**

III. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación, cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

DE AMPARO ⁷ emitida por la Segunda Sala de la SCJN. Jurisprudencia que no observó el juzgado de distrito.

30. **Es fundado el agravio de las autoridades por las siguientes razones. La SCJN en su anterior integración analizó el tema a debate estableciendo la siguiente jurisprudencia obligatoria:**

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es factible impugnar una ley o decreto por contravenir los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por vicios en el proceso de su creación frente a las formalidades que la normativa secundaria correspondiente prevé, lo cierto es que, por virtud de la irradiación del principio de instancia de parte agraviada, los vicios que se expongan contra ese proceso deben repercutir en un derecho que tutele al quejoso o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos -directa o indirectamente-, toda vez que sólo así el estudio respectivo y una eventual sentencia protectora podrán justificarse. Ahora, tratándose del procedimiento de urgente y obvia resolución -que implica la dispensa de trámites en la etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto-, sus violaciones sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. En ese tenor, como ese principio no tutela a los particulares, sino a los grupos parlamentarios, es evidente que, al reclamarse leyes o decretos, las eventuales irregularidades en ese procedimiento no tienen un impacto que pueda redundar en los derechos al debido proceso y de legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, por ende, no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo.⁸

31. En los términos de la citada tesis, efectivamente, la parte quejosa no se encontraba legitimada para cuestionar la existencia de esos vicios formales en el proceso legislativo.

32. En efecto, la Segunda Sala de esta SCJN estableció que el principio de **deliberación parlamentaria** tutela a los grupos parlamentarios, pero no a los particulares; y por ello, la quejosa no estaba legitimada para impugnar las posibles irregularidades en el procedimiento legislativo al no tener un impacto que pueda afectar en sus derechos de debido proceso y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM.

33. **Por esa razón, es fundado y suficiente el agravio de las autoridades recurrente dado que, la afectación por una posible violación al procedimiento por no motivarse la urgencia de la discusión de la iniciativa solamente puede plantearse por los legisladores,**

⁷ Jurisprudencia. 2a./J. 133/2017 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, octubre de 2017, Tomo II, página 1062. Registro digital: 2015322. De rubro y texto: **PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO.** Si bien es factible impugnar una ley o decreto por contravenir los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por vicios en el proceso de su creación frente a las formalidades que la normativa secundaria correspondiente prevé, lo cierto es que, por virtud de la irradiación del principio de instancia de parte agraviada, los vicios que se expongan contra ese proceso deben repercutir en un derecho que tutele al quejoso o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos -directa o indirectamente-, toda vez que sólo así el estudio respectivo y una eventual sentencia protectora podrán justificarse. Ahora, tratándose del procedimiento de urgente y obvia resolución -que implica la dispensa de trámites en la etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto-, sus violaciones sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. En ese tenor, como ese principio no tutela a los particulares, sino a los grupos parlamentarios, es evidente que al reclamarse leyes o decretos, las eventuales irregularidades en ese procedimiento no tienen un impacto que pueda redundar en los derechos al debido proceso y de legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, por ende, no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo.

⁸ La jurisprudencia **2a./J. 133/2017 (10a.)**, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, octubre de 2017, Tomo II, página 1062, Registro digital: 2015322.

sin que esa atribución sea transmisible a la parte quejosa, toda vez que no está legitimada para impugnar determinadas irregularidades en el procedimiento legislativo.

34. Similares consideraciones sostuvo la extinta Segunda Sala de la SCJN al resolver el amparo en revisión 466/2024, en sesión de cinco de marzo de dos mil veinticinco.⁹

b) Revisión Adhesiva

35. Por las razones expuestas se desestiman los argumentos planteados por la parte quejosa en el recurso de revisión adhesiva, pues en ellos se alega que el juez fue omiso en estudiar diversas irregularidades que considera violaban en su perjuicio los derechos humanos y garantías constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, fundamentación, motivación, congruencia y estricto derecho previstos en múltiples tratados internacionales en los que México es parte, así como en los artículos 1o., 14, 16, 41, 63, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello, porque en términos de la jurisprudencia antes citada, las eventuales irregularidades que se cometan en el procedimiento legislativo de urgente resolución no tienen un impacto que pueda redundar en los derechos al debido proceso y de legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la CPEUM y, por ende, no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo. **Es aplicable por identidad de razón la tesis 1a./J. 14/97 de rubro: AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.**¹⁰

36. En efecto, la subordinación procesal de la adhesión al recurso de revisión, evidencia que su finalidad es otorgar a la parte que obtuvo resolución favorable la oportunidad de defensa ante su eventual impugnación, de modo que, el órgano revisor pueda valorar otros elementos de juicio que, en su caso, le permitan confirmar el punto decisorio que le beneficia.¹¹

37. En el caso, los agravios identificados se refieren a reafirmar al fondo de las normas controvertidas, pero que no fueron analizadas por el juez; de ahí que, en lo único en que pudiera abonar la parte quejosa es en la violación al procedimiento legislativo.

38. Por tanto, los agravios son **inoperantes**, en virtud de que el recurrente adhesivo hace valer aspectos ajenos a la naturaleza de ese recurso.

39. Ante esta conclusión y dado lo fundado del recurso de revisión de las autoridades y lo infundado de la revisión adhesiva, se impone, de acuerdo con lo previsto por el artículo

⁹ Por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán (Ponente), Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek

¹⁰ Texto: Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustentan la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado (Registro digital: 198920, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 14/97, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997, página 21, Tipo: Jurisprudencia)

¹¹ La Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2005101; Instancia: Pleno; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: P./J. 28/2013 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, página 7 Tipo: Jurisprudencia

REVISIÓN ADHESIVA. LOS AGRAVIOS RELATIVOS DEBEN CONSTREÑIRSE A LA PARTE CONSIDERATIVA DEL FALLO RECURRIDO QUE ESTÁ RELACIONADA CON EL PUNTO RESOLUTIVO QUE FAVORECE AL RECURRENTE. La subordinación procesal de la adhesión al recurso de revisión, evidencia que su finalidad es otorgar a la parte que obtuvo resolución favorable la oportunidad de defensa ante su eventual impugnación, de modo que el órgano revisor pueda valorar otros elementos de juicio que, en su caso, le permitan confirmar el punto decisorio que le beneficia. En ese sentido, los agravios formulados por la parte que se adhirió al recurso de revisión, deben constreñirse a impugnar las consideraciones del fallo recurrido que, en principio, no le afectaban por haber conseguido lo que pretendía, pero que, de prosperar los agravios formulados contra el resolutivo que le beneficia, podrían subsistir, perjudicándole de modo definitivo; de ahí que deben declararse inoperantes los agravios enderezados a impugnar las consideraciones que rigen un resolutivo que le perjudica, en tanto debió impugnarlas a través del recurso de revisión, que es el medio de defensa específico previsto en la Ley de Amparo para obtener la revocación de los puntos decisorios de una resolución que causa perjuicio a cualquiera de las partes.

93, fracción VI, de la Ley de Amparo, examinar los conceptos de violación que el dejó de estudiar.

c) Improcedencia del Juicio de Amparo

40. La parte quejosa reclamó los artículos 19, 20, 23, 27, 41, 46 y 64 de la Ley de Minería, modificada mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Minería, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral para los Residuos en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés.

41. El juez de distrito con relación a esos preceptos al examinar las causales de improcedencia resolvió que la Secretaría de Economía expidió a nombre de la parte quejosa los títulos de concesión minera 213776, 219676 y 165221, título sobre los lotes denominados “Chipayvo”, “Arco Iris” y “La Reyna”. Asimismo, consideró que los medios de prueba descritos eran eficaces para demostrar que el quejoso contaba con títulos vigentes de concesiones mineras, lo que ponía de manifiesto la calidad de concesionaria que tenía la demandante.

42. Puntualizó que, la parte quejosa es sujeto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua desde la fecha en que entró en vigor porque se encuentra obligado a atender su contenido, ya que cuenta con títulos de concesión minera.

43. Por su parte, el tribunal colegiado al resolver el recurso de revisión desestimó los agravios de las autoridades que versaron sobre la actualización de la improcedencia del juicio, respecto de lo cual estableció que contrariamente a lo señalado, a la parte quejosa le asiste interés jurídico para acudir al juicio de amparo debido a que las normas que combate las impugnó con motivo de su entrada en vigor, declarando infundado los agravios planteados.

44. Pues bien, tal interpretación efectuada por el tribunal que previno en el conocimiento del asunto **no puede convalidarse por este Pleno.**

45. Es verdad que en términos del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los tribunales colegiados de circuito se advierte que el tribunal colegiado de circuito debe abordar el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio al conocer del recurso de revisión y, en caso, de resultar procedente el juicio, dejará a salvo la jurisdicción de la SCJN cuando el asunto no quede comprendido en los supuestos de competencia delegada, **supuesto que aconteció en el caso.**

46. Sin embargo, este Pleno, atendiendo a los principios que rigen en el artículo 17 de la CPEUM, específicamente **la recta administración de justicia** considera que **no hay obstáculo para estudiar de nueva cuenta la procedencia del juicio.**

47. Aunado a que este Pleno no puede ser vinculada indefectiblemente por las decisiones de los Tribunales Colegiados. Sirva de fundamento a lo anterior, en la razón

esencial de sus consideraciones, el criterio jurisprudencial 2a./J. 98/2017 (10a.) de rubro: **REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI AL EJERCER SU COMPETENCIA DELEGADA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DESESTIMAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO O LOS EFECTOS DE UNA POSIBLE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL, ESA DECISIÓN NO VINCULA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**¹²

47. Es menester precisar que si bien se tuvo por demostrado que la peticionaria del amparo es una empresa minera y que cuenta con diversas concesiones en ese sector, lo que en su momento se estimó suficiente para tener por acreditado su interés jurídico para combatir, en términos generales, el decreto de mérito, lo cierto es que una de las disposiciones que en forma específica impugnó la quejosa fue consentida puesto que fue publicada en un decreto anterior.

48. El análisis de la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa se hizo exclusivamente a partir de la perspectiva de que ésta se desempeña en el sector minero. En la sentencia recurrida y en la resolución del Tribunal Colegiado, que previno en el asunto, se consideró acreditado el interés jurídico por el simple hecho de que las normas reclamadas se relacionaban con las concesiones para minería y que la parte quejosa tenía calidad de concesionaria. Ante dicho análisis genérico, en la presente resolución, es viable examinar desde otra perspectiva si las normas deparan perjuicio, atendiendo a los supuestos que contemplan en forma específica.

49. Sin embargo, desde una distinta perspectiva, atendiendo en forma concreta al contenido de las disposiciones impugnadas, este Pleno advierte que en el caso debe sobreseerse de oficio respecto de las normas reclamadas que necesariamente ameritan un acto concreto de aplicación para que estén en aptitud de causar un perjuicio, pues en términos del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Esto es así por lo que hace a los artículos 23, 41, 46 y 64 de la Ley de Minería, que establecen:

Artículo 23.- La Secretaría puede autorizar la transmisión de la titularidad de concesiones mineras. Para tal efecto, el Reglamento debe señalar el trámite a realizar de manera conjunta entre la persona titular y la nueva persona beneficiaria. La Secretaría puede autorizar la transmisión de la titularidad de la concesión minera una vez que la persona beneficiaria de la transmisión pague los derechos correspondientes y cumpla con los requisitos solicitados para la concesión original. Dicha transmisión se inscribirá en el Registro Público de Minería. En caso de incumplimiento de obligaciones previas a la transmisión de la titularidad, serán solidariamente responsables la persona que transmite y la beneficiaria de la transmisión. Una vez autorizada la transmisión, la Secretaría debe actualizar los datos del título de concesión considerando la vigencia restante. La concesión transmitida tiene los mismos efectos jurídicos que la original y la nueva persona titular tendrá los derechos y obligaciones derivados de la titularidad transmitida. La Secretaría no reconocerá ningún tipo de documento o acto de carácter privado mediante el cual se pretenda realizar la transmisión.

Artículo 41.- Son nulas las transmisiones de la titularidad de concesiones de explotación mineras cuando se lleven a cabo en contravención a las disposiciones jurídicas aplicables. Derogado.

¹² **Texto:** Como consecuencia de los diversos acuerdos generales para delegar en los Tribunales Colegiados de Circuito, entre otras, la facultad para analizar las causas de improcedencia de los juicios de amparo indirecto en revisión de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos órganos jurisdiccionales deben limitarse a depurar las cuestiones de improcedencia y, en su caso, remitir el asunto al Alto Tribunal para la resolución de fondo procedente; supuesto en el cual, en principio, debe respetarse lo resuelto por aquéllos, porque en los aspectos de procedencia se erigen como órganos terminales de decisión. No obstante, cuando las razones ofrecidas por los Tribunales Colegiados de Circuito para desestimar las cuestiones de improcedencia involucren pronunciamientos sobre el fondo del asunto, **no hay obstáculo para estudiar de nueva cuenta la procedencia del juicio**, particularmente, los razonamientos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues dichos órganos no deben fijar criterios que rebasen la competencia delegada que les fue conferida, ni vincular al Máximo Tribunal a estudiar los conceptos de violación, con base en una sentencia previa que implícita o explícitamente dispuso respecto de la concesión del amparo o los efectos que a ésta deben darse (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2014804, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 98/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, agosto de 2017, Tomo II, página 817, Tipo: Jurisprudencia).

Artículo 46.- Corresponde a la Secretaría la administración del Registro Público de Minería, en el que deben inscribirse los actos, contratos, convenios, y resoluciones administrativas o judiciales, que a continuación se mencionan:

I. y II. ...

III. Los decretos que declaren reservas mineras o que supriman zonas de éstas;

IV. y V. ...

VI. La transmisión de la titularidad de concesiones;

VII. a XI.

Artículo 64.- Se sancionará con pena de cinco a diez años de prisión y multa del cinco por ciento del total de sus ingresos anuales más diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con independencia de las sanciones administrativas que procedan, a quien:

I. Extraiga minerales o sustancias sujetas a la aplicación de esta Ley sin ser titular de la concesión minera;

II. Enajene o trafique de cualquier manera minerales y derivados metalúrgicos sin contar con la concesión correspondiente;

III. Para obtener o conservar la concesión minera, exhiba documentación falsa, y

IV. Provoque daños a sus trabajadores por falta de seguridad, al omitir el cumplimiento de lo estipulado en esta Ley, su Reglamento o la normatividad aplicable en materia de seguridad de minas.

50. En los artículos 23, 41 y 46, se regula el trámite para lograr la autorización para la transmisión de la titularidad de concesiones mineras y los supuestos en los cuales es nulo ese procedimiento, así como los tipos de actos que deben inscribirse en el Registro Público de Minería; en tanto que, en el numeral 64, se establece la sanción que corresponde derivado de la actualización de determinada conducta tales como extraer minerales o sustancias sujetas a la Ley sin contar con la concesión correspondiente; enajenar o traficar minerales y derivados metalúrgicos sin contar con concesión para ello; exhibir documentación falsa para obtener o conservar la concesión minera.

51. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debe sobreseer respecto de los artículos mencionados, toda vez que las normas precisadas no han sido aplicadas en perjuicio de la parte quejosa.

52. En suma, como las normas que han quedado precisadas requerían de un acto concreto de aplicación para que causaran perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, y ello no quedó demostrado en autos, procede sobreseer a su respecto, puesto que el juicio de amparo no es una vía jurídica para realizar un control abstracto de las normas reclamadas.

53. De igual forma procede sobreseer en el juicio con relación al artículo 20, párrafo primero de la Ley Minera que fue reformado mediante decreto de once de agosto de dos mil catorce, anterior al Decreto reclamado, por lo que su impugnación resulta notoriamente extemporánea. A continuación, se reproduce esa porción normativa:

LEY DE MINERÍA (ANTES LEY MINERA)	
Texto del artículo	Publicación en el DOF
<p>Artículo 20. Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras o por contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, en términos de la Ley de Hidrocarburos, sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, que solicitará opinión favorable a la Secretaría de Energía.</p> <p>(...)</p>	<p>Reformado el once de agosto de dos mil catorce</p>

54. Como se pone de manifiesto, procede sobreseer en el juicio por extemporaneidad respecto del precepto legal citado, ello con fundamento en el artículo 61, fracción XIV,

de la Ley de Amparo, que establece que el juicio es improcedente contra normas generales consentidas tácitamente, esto es, por no haberse promovido el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

d) Estudio de los conceptos de violación

55. Por otro lado, la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce para impugnar los artículos 19, 20 y 27 de la Ley de Minería que, en el Decreto reclamado, se omitió incluir un artículo transitorio donde se aclare la situación jurídica en cómo quedarán aquellas personas, como la quejosa, adquirieron la titularidad o los derechos que otorga una concesión minera, mediante contrato privado celebrado entre particulares, en los términos que establecía el artículo 23 de la Ley Minera; al respecto, debe señalarse que los motivos de inconformidad apuntados son **infundados**.

56. En efecto, la Secretaría de Economía por conducto del Coordinador de lo Contencioso remitió al juzgado de distrito las certificaciones de las concesiones mineras denominadas “La Reyna” título 165221, “Chipayvo” título 213776 y “Arco Iris” título 219676 emitidas por el director del Registro Público de Minería mediante oficio número 110.03.14825.2023,¹³ del que se desprende lo siguiente:

CERTIFICA:

Que después de realizar una búsqueda en los archivos de la Dirección de Registro Público de Minería, se encontraron antecedentes del registro de la concesión minera denominada “LA REYNA”, con número de Título 16221, ubicada en URIQUE, CHIHUAHUA, bajo acta 266 del volumen 42 del Libro de ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS, inscrita a favor de GRUPO SLA MINING, S DE R.L. DE C.V. al 100% la concesión que aparece VIGENTE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1979 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2029.

Asimismo, se hace constar que se encuentra en trámite el registro de un contrato de exploración bajo el folio 4835.

CERTIFICA:

Que después de realizar una búsqueda en los archivos de la Dirección de Registro Público de Minería, se encontraron antecedentes del registro de la concesión minera denominada “CHIPAYVO”, con número de Título 213776, ubicada en URIQUE, CHIHUAHUA, bajo acta 282 del volumen 42 del Libro de ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS, inscrita a favor de GRUPO SLA MINING, S DE R.L. DE C.V. al 50% y ARTURO CORDOVA BANDA al 50% concesión que aparece VIGENTE 15 DE JUNIO DE 2001 AL 14 DE JUNIO DE 2051.

Asimismo, se hace constar que se encuentran en trámite los registros de contratos bajo los folios 30621-2019, 18883-2020 y 4835-2023.

CERTIFICA:

Que después de realizar una búsqueda en los archivos de la Dirección de Registro Público de Minería, se encontraron antecedentes del registro de la concesión minera denominada “ARCO IRIS”, con número de Título 219676, ubicada en URIQUE, CHIHUAHUA, bajo acta 289 del volumen 42 del Libro de ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS, inscrita a favor de GRUPO SLA MINING, S DE R.L. DE C.V. al 100% concesión que aparece VIGENTE.

Asimismo, se hace constar que se encuentra en trámite el registro de un contrato bajo el folio 4835.

57. Certificaciones con las que se acredita que la empresa quejosa es la titular actual de dichas concesiones mineras y que se encuentran inscritas en el Registro Público de Minería.

¹³ De veintisiete de julio de dos mil veintitrés, consultable en el expediente digital del juicio de amparo 1405/2023

58. De ahí que, en todo caso, las concesiones otorgadas se rigen por el artículo sexto Transitorio que establece que:

“Sexto. Las concesiones de exploración y explotación otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto tendrán la duración prevista en el título respectivo.”.

59. Por ello, contrario a lo que aduce la parte actora, resulta desacertado que no exista regulación en la que se establezca la manera en cómo quedarán las concesiones adquiridas previamente al decreto impugnado, puesto que, el artículo transitorio referido es puntual en señalar que toda concesión otorgada con anterioridad tendrá la duración prevista en el título respectivo.

60. También, contrario a lo que afirma la quejosa, las modificaciones realizadas al primer renglón del artículo 19 de la Ley de Minería, en modo alguno desconocen los contratos privados celebrados entre particulares inscritos ante la Secretaría de Economía, en atención a que el artículo sexto transitorio prevé que toda concesión será respetada conforme a la duración marcada en el propio documento. A partir de lo anterior, es evidente que dicho transitorio genera certeza jurídica a los actos jurídicos cuyo objeto tuvieron la transmisión de determinada concesión celebrados con antelación al mismo, en virtud de que en momento alguno se desconoce los efectos o alcances jurídicos que pudieran tener, sino todo lo contrario, pues se reconoce su existencia y vigencia conforme a la concesión otorgada.

61. Por otro lado, la quejosa expresa que, el Decreto reclamado, tiene una aplicación retroactiva porque priva de derechos adquiridos, pues desconoce como titular de las concesiones a quienes adquirieron alguna mediante contratos privados, con lo que se viola el derecho adquirido a obtener la expropiación de los terrenos para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio; aprovechamiento de aguas provenientes del laboreo de las minas, sin tener que pagar contraprestación alguna por su aprovechamiento; obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente; transmitir la titularidad; y, obtener prórroga en concesiones mineras, por un nuevo plazo de cincuenta años; lo que considera viola lo establecido en los artículos 1o., 14 y 16 de la CPEUM.

62. Para analizar el planteamiento anterior conviene precisar que el derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad.

63. La entonces Segunda Sala precisó que la confianza legítima es una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público.

64. Atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos. Tratándose de actos legislativos, como el que nos ocupa, el principio de confianza legítima debe invocarse bajo la perspectiva de irretroactividad de normas consagrado en el artículo 14 de la CPEUM, porque pretender

tutelar meras expectativas de derecho contra actos legislativos equivaldría a la petrificación o congelación del derecho, a su inmovilización total o parcial y el consecuente cierre definitivo a los cambios sociales, políticos o económicos, lo que sería contrario al Estado de derecho democrático y a la facultad que, en éste, tiene el legislador de ajustar la norma a las cambiantes necesidades de la sociedad y de la realidad.

65. El citado artículo constitucional ordena:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (...)

66. Esta SCJN ha sostenido que la irretroactividad que prohíbe el dispositivo constitucional inserto se encuentra referida tanto al legislador, por cuanto, a la expedición de las leyes, como a las autoridades que las aplican a un caso determinado, y para explicarlo ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos y a la teoría de los componentes de la norma.

67. En la teoría de los derechos adquiridos se distingue entre dos conceptos: el de derecho adquirido, que es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico; y el de expectativa de derecho, que es la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; esto es, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo futuro que en el mundo fáctico no se ha materializado.

68. Dicha teoría sostiene que, si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos, sino simples expectativas de derecho, no vulnera el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el artículo 14 de la CPEUM. Dicho de otro modo, no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.

69. Una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, toda vez que, éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado, y no cuando se aplica a meras expectativas de derecho, pues en este caso no se contraviene la garantía de la irretroactividad de las leyes que consagra el artículo 14 de la CPEUM.

70. Resulta aplicable la tesis aislada de rubro: IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.¹⁴

¹⁴ IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se

71. Por otra parte, la teoría de los componentes de la norma se basa en el principio de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo:

a. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

b. Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas.

c. Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso, la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.

d. Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en ella se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior.

72. De este modo, para estar en posibilidad de determinar si una disposición normativa es violatoria de lo dispuesto por el artículo 14 de la CPEUM, con base en la teoría de los componentes de la norma, es necesario considerar los distintos momentos en que se

entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.

Amparo en revisión 607/2000. Héctor Adalberto García Noriega. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXXXVI, Primera Parte, página 80, tesis de rubro: "RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA."

Registro digital: 189448; **Instancia:** Segunda Sala; **Novena Época;** **Materia(s):** Constitucional; **Tesis:** 2a. LXXXVIII/2001; **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.; Tomo XIII, Junio de 2001, página 306; **Tipo:** Aislada

realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y el momento en que entra en vigor la nueva disposición. Así se desprende de la jurisprudencia de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.¹⁵

73. De lo expuesto se advierte que una norma transgrede el principio de irretroactividad cuando trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho, de situaciones que aún no se han realizado o de consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en esos casos sí se permite que la nueva ley las regule.

74. Ahora, el Decreto reclamado tuvo como objeto reformar diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

75. Dentro de las citadas reformas se destacan las realizadas a la Ley Minera (denominada Ley de Minería a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto), en específico, la modificación a su artículo 13, a partir de la que se ordenó que las concesiones mineras sólo se otorgarán mediante concurso de licitación pública que garantice al Estado las mejores condiciones económicas y de beneficio a la población, y se previó el procedimiento respectivo.

76. Antes de la reforma reclamada, la ley preveía que la concesión se otorgaría sobre el terreno libre al primer solicitante en tiempo que cumpliera los requisitos establecidos en dicha ley y en su reglamento, esto es, la norma no exigía un concurso de licitación

¹⁵ RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan. Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 1551/99. Doms Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número 123/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil uno. Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 188508; Instancia: Pleno; Novena Época; Materias(s): Constitucional; Tesis: P./J. 123/2001; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001, página 16; Tipo: Jurisprudencia

pública como requisito para otorgar concesiones mineras, sino que éstas se daban al primer solicitante que cumpliera los requisitos respectivos.

77. Al imponerse una nueva normatividad para obtener nuevas concesiones no se transgrede el principio de irretroactividad en perjuicio de la parte quejosa, porque como se explicó en líneas anteriores no existe un derecho a que la normatividad deba permanecer estática; así, por ejemplo, conforme al artículo 27, fracción IV, de la Ley de Minería, las personas titulares de concesiones mineras están obligadas a sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente, las cuales evidentemente van cambiando, atendiendo, entre otras cuestiones a la propia evolución en medidas de seguridad en las minas, así como a lo que se requiera para la protección del derecho a un medio ambiente sano.

78. Asimismo, los cambios en la normatividad relacionada con la actividad minera habrá de incidir en todas las empresas que pretendan desarrollar esa actividad y no de manera privativa en la peticionaria del amparo, como sugiere en su escrito de demanda al señalar que se afectan, entre otros derechos humanos el principio de irretroactividad, establecer nuevos derechos especiales por la actividad extractiva y nuevos derechos extraordinarios por la enajenación del oro, plata y platino, aunado a que se incluyeron nuevos impuestos, entre más.

79. Es importante mencionar que el artículo sexto transitorio del propio Decreto reclamado prevé que “Las concesiones de exploración y explotación otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto tendrán la duración prevista en el título respectivo.”, lo que pone en evidencia que no hay una privación de los títulos de concesión que fueron otorgados en su momento a la parte quejosa como también sugiere en su demanda de amparo.

80. Por otro lado, la parte quejosa señala en su demanda que se afectan, entre, los derechos para la transmisión de las concesiones mediante contratos privados eliminándose la posibilidad de inscribirse ante el Registro Público de Minería; sin embargo, con ello la peticionaria del amparo se refiere a los requisitos de nuevas concesiones, sin que en sus conceptos de violación argumente cómo es que la normatividad que reclama afecta concretamente los títulos de concesión que ya tiene, siendo además que el amparo en materia administrativa es de estricto derecho.

81. De esa manera, este Pleno considera que las disposiciones reclamadas no vulneran el principio de irretroactividad y, en todo caso, los conceptos de violación no están encaminados a demostrar una afectación indebida en los derechos que corresponden concretamente a las concesiones de las que ya es titular la empresa quejosa.

82. Hasta aquí se ha examinado la pretensión esencial de la peticionaria del amparo en el sentido de que, según lo planteado en su demanda, la normatividad que estaba vigente cuando se otorgaron los títulos de concesión con los que cuenta no debiera cambiar, bajo el argumento de que se transgrede el principio de irretroactividad, siendo importante precisar que al efecto no puede hacerse un pronunciamiento en abstracto respecto de las obligaciones que eventualmente deriven de los artículos relativos del decreto impugnado, específicamente para la parte quejosa, sin conceptos de violación dirigidos a ello.

V. DECISIÓN

Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, al haber resultado **fundado** el recurso de revisión de las autoridades, lo **infundado** de la revisión adhesiva e **infundados** los conceptos de violación que la parte quejosa expuso en su demanda de amparo, lo procedente es **revocar** la sentencia recurrida y **sobreseer** y **negar** el amparo.

Por todo lo expuesto y fundado, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO. Se **revoca** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se **sobresee** en el juicio respecto de los artículos 20, párrafo primero, 23, 41, 46 y 64 del Decreto reclamado.

TERCERO. La Justicia de la Unión **no ampara ni protege** a la parte quejosa contra de los artículos 19, 20 (con excepción del párrafo primero) y 21 reclamados del Decreto.

CUARTO. Es **infundada** la revisión adhesiva.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvase los autos al tribunal colegiado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.